Juzgado de Primera Instancia nº 22 de Barcelona

Procedimiento ordinario 1262/2019 -1B

Parte demandante/ejecutante:
Procurador/a:
Abogado/a: Maria Lourdes Galvé Garrido

Parte demandada/ejecutada: CITISPAIN S.A.
Procurador/a:
Abogado/a:

SENTENCIA Nº 235/2021

Magistrado:

SENTENCIA

En Barcelona, a 16 de diciembre de 2021

VISTOS y examinados por mí, _____, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia núm. 22 de Barcelona, los autos de Procedimiento Ordinario núm. 1262/2019, promovidos a instancia de don _____, contra la entidad CITISPAIN S.A., procedo a dictar resolución en base a los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por turno de reparto correspondió a este Juzgado el conocimiento de la demanda de Procedimiento Ordinario declarativa de nulidad del contrato de tarjeta de crédito Citibank, modalidad "Citi Oro", de fecha 4 de septiembre de 2008, instada por la Procuradora de los Tribunales doña _____, en nombre y

representación de don _____, que tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación, terminó suplicando que se dictara sentencia por la que: 1).- se declare la nulidad del contrato de crédito al consumo vinculado a una tarjeta de crédito "Citi Oro". 2).- Subsidiariamente, a) se declare la nulidad por falta de transparencia y/o abusividad de la cláusula de fijación de interés remuneratorio y composición de pagos del contrato; b) se declare la nulidad por abusividad de la cláusula de comisión de impagados, cláusula de variación unilateral de condiciones y de la póliza de seguro accesoria. 3).- se condene a la parte demandada a la restitución de los efectos dimanantes del contrato declarado nulo o de las cláusulas cuya nulidad sea declarada, con devolución recíproca de tales efectos, más los intereses legales y procesales, y al pago de las costas procesales.

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda se emplazó a la parte demandada para que la contestara y dentro del plazo concedido, la parte demandada presentó escrito contestando a la demandada y oponiéndose a la misma, alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación, y suplicando, que previos los trámites legales oportunos, se dicte sentencia por la que se desestime íntegramente la demanda, con expresa imposición de las costas procesales a la parte actora.

TERCERO.- Convocada la audiencia previa, ésta tuvo lugar en el día y hora señalados, con asistencia de ambas partes debidamente representadas y subsistiendo el pleito se cumplieron las finalidades del artículo 414 y siguientes de la LECivil, proponiendo las partes la prueba que tuvieron por conveniente, y una vez admitida la pertinente se señaló fecha y hora para la celebración de la correspondiente vista. Mediante escritos presentados por ambas partes y no constando prueba a practicar en el acto de la vista al no constar los datos identificativos del testigo propuesto y admitido en la audiencia previa, se acordó la suspensión del señalamiento, y una vez aportaron las partes sus correspondientes conclusiones finales se dictó Diligencia de Ordenación de fecha 3-12-2021 al objeto de dictar la correspondiente sentencia.

A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- En el presente procedimiento se ejercita por la parte demandante una acción individual de nulidad por usura de un contrato de tarjeta de crédito, modalidad "Citi Oro", de fecha 4 de septiembre de 2008. Alega la parte demandante en síntesis que suscribió con la demandada, sin negociación alguna, de modo rápido y casi automático, el contrato de crédito al consumo vinculado a una tarjeta revolving. Añade que el tipo de interés aplicado es usurario al estar ante un tipo de interés nominal remuneratorio TAE 26,82%, y solicita principalmente se declare la nulidad del contrato por usura, y subsidiariamente las nulidades referenciadas en el antecedente de hechos

primero. Siendo la consecuencia de ello la restitución de los efectos dimanantes del contrato declarado nulo o de las cláusulas cuya nulidad sea declarada, con devolución recíproca de tales efectos, más los intereses legales y procesales

La entidad demandada se opone en síntesis, tras efectuar manifestaciones sobre la cumplimentación y remisión al banco de la solicitud de la tarjeta, estudio de la solicitud y aprobación de la línea de crédito y activación de la tarjeta de crédito, así como sobre el funcionamiento de la tarjeta, por cuanto a partir de mayo de 2010 el demandante llega a un acuerdo con la demandada y se refinancia la deuda, de modo que deja de generar los intereses estipulados en el contrato, y se fracciona en mensualidades con un interés nominal del 10,5% en lugar del 24%, y finalmente el 29-9-2011 liquida la totalidad de la deuda.

SEGUNDO.- En el caso de autos la parte actora ejercita principalmente como se ha dicho la acción individual de nulidad del contrato de autos por usura. Por tanto, la cuestión discutida es la relativa a si unos intereses como los expuestos, en un contrato como el que nos ocupa, de tarjeta de crédito, pueden reputarse usurarios, a tenor de lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley de 23 de julio de 1908, sobre nulidad de los contratos de préstamos usurarios, tomando en cuenta su aplicación no sólo a los supuestos de préstamo sino de créditos, como el de autos, a tenor de lo dispuesto en el artículo 9 del citado texto legal, que dice: “Lo dispuesto por esta ley se aplicará a toda operación sustancialmente equivalente a un préstamo de dinero, cualesquiera que sean la forma que revista el contrato y la garantía que para su cumplimiento se haya ofrecido.” También cabe considerar al amparo de la STS de 25-11-2015, que la Ley de Represión de la Usura se configura como un límite a la autonomía negocial del artículo 1.255 del Código Civil, aplicable a los préstamos, y, en general, a cualesquiera operación de crédito.”

Pues bien, el interés remuneratorio convenido del 26,82% TAE, conforme se desprende del anexo incorporado al Reglamento de la tarjeta de crédito que ambas partes aportan, ha de calificarse de usurario, por ser notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso, ello conforme al artículo 1 de la Ley de Represión de la Usura. La jurisprudencia advierte que la referencia a tomar no es el interés legal del dinero, sino el interés normal o habitual en concurrencia con las circunstancias del caso y la libertad existente en esta materia (SSTS de 25-11-2015 y 4-3-2020 sobre tarjetas revolving). Para lo cual puede acudir a las estadísticas del Banco de España, tomando como base la información que mensualmente tienen que facilitarle las entidades de crédito sobre los tipos de interés que aplican a las diversas modalidades de operaciones activas y pasivas. En la STS de 4-3-2020, se especifica que ha de compararse con el tipo medio de interés de las operaciones de crédito mediante tarjetas de crédito y revolving de dichas estadísticas y no con el más genérico referido a las operaciones de crédito al consumo. Dichas sentencias señalan que puesto que para que un préstamo pueda ser considerado

usurario es necesario que el interés estipulado, además de ser notablemente superior al normal del dinero, sea manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso, y dado que la normalidad no precisa especial prueba, mientras que la excepcionalidad necesita ser alegada y probada, corresponde entonces al prestamista la carga de la prueba de tales circunstancias excepcionales que justifiquen un interés notablemente superior al normal del dinero, sin que puedan considerarse al respecto el riesgo derivado del alto nivel de impagos anudado a operaciones de crédito al consumo concedidas de un modo ágil y sin comprobar adecuadamente la capacidad de pago del prestatario, por cuanto que la concesión irresponsable de préstamos al consumo a tipos de interés muy superiores a los normales, que facilita el sobreendeudamiento de los consumidores y trae como consecuencia que quienes cumplen regularmente sus obligaciones tengan que cargar con las consecuencias del elevado nivel de impagos, no puede ser objeto de protección por el ordenamiento jurídico.

De la información estadística del Banco de España resulta que los tipos de interés medio (TAE) de las operaciones con tarjetas de crédito de pago aplazado, incluidas las de la modalidad revolving, correspondientes a los años 2010 a 2021, oscilan de media entre el 17,71% y el 20,90%. Llegados a este punto la STS (Pleno) de 4-3-2020 al abordar la cuestión de la determinación de cuándo el interés de un crédito revolving es usurario por ser notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso. Indica que a diferencia de otros países de nuestro entorno en que la ley fija porcentajes o parámetros concretos para determinar a partir de qué tipo de interés debe considerarse que una operación de crédito tiene carácter usurario, en España la Ley de usura, con más de un siglo de vigencia, utiliza conceptos claramente indeterminados, lo que obliga a los tribunales a realizar una labor de ponderación. Y en el caso sometido a su consideración sentenció como usurario, un interés del 26,82% (incrementado hasta un porcentaje superior en el momento de interposición de la demanda), confirmando así la conclusión alcanzada en el mismo sentido por el Juzgado y la Audiencia Provincial. La sentencia añadió lo siguiente: "6.- El tipo medio del que, en calidad de «interés normal del dinero», se parte para realizar la comparación, algo superior al 20% anual, es ya muy elevado. Cuanto más elevado sea el índice a tomar como referencia en calidad de «interés normal del dinero», menos margen hay para incrementar el precio de la operación de crédito sin incurrir en usura. De no seguirse este criterio, se daría el absurdo de que para que una operación de crédito revolving pudiera ser considerada usuraria, por ser el interés notablemente superior al normal del dinero y desproporcionado con las circunstancias del caso, el interés tendría que acercarse al 50%. 7.- Por tal razón, una diferencia tan apreciable como la que concurre en este caso entre el índice tomado como referencia en calidad de «interés normal del dinero» y el tipo de interés fijado en el contrato, ha de considerarse como «notablemente superior» a ese tipo utilizado como índice de referencia, a los efectos que aquí son relevantes. 8.- Han de tomarse además en consideración otras circunstancias concurrentes en este tipo de operaciones de crédito, como son el público al que suelen ir destinadas, personas que por sus condiciones de solvencia y garantías disponibles no pueden acceder a otros créditos menos gravosos,

y las propias peculiaridades del crédito revolving, en que el límite del crédito se va recomponiendo constantemente, las cuantías de las cuotas no suelen ser muy elevadas en comparación con la deuda pendiente y alargan muy considerablemente el tiempo durante el que el prestatario sigue pagando las cuotas con una elevada proporción correspondiente a intereses y poca amortización del capital, hasta el punto de que puede convertir al prestatario en un deudor «cautivo», y los intereses y comisiones devengados se capitalizan para devengar el interés remuneratorio. 9.- Como dijimos en nuestra anterior sentencia 628/2015, de 25 de noviembre, no puede justificarse la fijación de un interés notablemente superior al normal del dinero por el riesgo derivado del alto nivel de impagos anudado a operaciones de crédito al consumo concedidas de un modo ágil (en ocasiones, añadimos ahora, mediante técnicas de comercialización agresivas) y sin comprobar adecuadamente la capacidad de pago del prestatario, pues la concesión irresponsable de préstamos al consumo a tipos de interés muy superiores a los normales, que facilita el sobreendeudamiento de los consumidores, no puede ser objeto de protección por el ordenamiento jurídico. Por tanto, la justificación de esa importante diferencia entre el tipo medio aplicado a las tarjetas de crédito y revolving no puede fundarse en esta circunstancia. 10.- Todo ello supone que una elevación porcentual respecto del tipo de interés medio tomado como «interés normal del dinero» de las proporciones concurrentes en este supuesto, siendo ya tan elevado el tipo medio de las operaciones de crédito de la misma naturaleza, determine el carácter usurario de la operación de crédito".

Aplicando la normativa y jurisprudencia expuesta al presente caso, la conclusión ha de ser la misma al tratarse de una tarjeta de crédito en la modalidad revolving de pagos aplazados con un interés remuneratorio pactado del 26,82% TAE, es decir, igual del sometido por la referida anterior STS (Pleno) de 4-3-2020, no justificando la demandada un interés menor pactado en el condicionado particular, si bien por los extractos aportados a las actuaciones se observa que se refinanció el contrato de tarjeta siendo el TAE aplicado desde el año 2010/2011 del 10,50%. De todas formas, hay que concluir que en el presente caso se acordó en el contrato de tarjeta un interés usurario. Por otro lado, resulta absolutamente indiferente si finalmente la TAE aplicada resultó ser menor o que actualmente el tipo de interés que se le está aplicando sea inferior tanto para compras como para disposiciones en efectivo, pues se trata de una nulidad "radical, absoluta y originaria, que no admite convalidación confirmatoria, porque es fatalmente insubsanable, ni es susceptible de prescripción extintiva. En definitiva, no acredita la entidad demandada la existencia de circunstancias excepcionales que justificaran un interés remuneratorio tan elevado, notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso, que son los parámetros que señala el Tribunal Supremo para considerar usurario el interés fijado.

CUARTO.- Las consecuencias de todo ello es la declaración de nulidad del contrato de tarjeta de crédito objeto del procedimiento al considerarse usurario, lo que implica que la parte actora venga obligada a reintegrar a la demandada tan sólo la suma recibida, de

conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Ley de Represión de la Usura, y si hubiera satisfecho parte de aquélla y los intereses vencidos, el prestamista devolverá al prestatario lo que, tomando en cuenta el total de lo percibido, exceda del capital prestado.

Por tanto, debe declararse la nulidad por usurario del referido contrato, y condenar a la entidad demandada a la devolución de todas las cantidades percibidas de la actora que, por cualquier concepto (intereses, comisiones, penalizaciones por impago, seguro...), superen la cifra del capital dispuesto, hasta la fecha de esta resolución, más sus intereses legales incrementados en dos puntos (artículo 576.1 de la LECivil) desde la fecha de esta resolución hasta su completo pago, todo ello según se determine en ejecución de sentencia, aportando para su correcta determinación, copia de las liquidaciones y extractos mensuales de la tarjeta de crédito, completos y correlativos, en el mismo formato que fueron originalmente remitidos al cliente, debiendo recalcular la amortización del crédito declarado nulo, acompañando cuadro detallado de los importes resultantes, desde la fecha de suscripción del contrato de tarjeta, hasta la última liquidación practicada.

QUINTO.- En materia de costas, siendo procedente la estimación de la demanda y en aplicación del artículo 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se impone a la parte demandada el pago de las costas procesales.

En virtud de los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

Que estimando la demanda promovida por la Procuradora de los Tribunales doña _____, en nombre y representación de don _____, contra la entidad CITISPAIN S.A., debo **DECLARAR Y DECLARO** la nulidad por usura del contrato de tarjeta de crédito de fecha 4 de septiembre de 2008 y sus posteriores modificaciones que une a las partes, y debo **CONDENAR Y CONDENO** a la entidad CITISPAIN S.A., a la devolución de todas las cantidades percibidas de la actora que, por cualquier concepto, superen la cifra del capital dispuesto, hasta la fecha de esta resolución, más sus intereses legales incrementados en dos puntos desde la fecha de esta resolución hasta su total reintegro, todo ello a determinar en ejecución de sentencia conforme a lo indicado en el apartado Cuarto de los Fundamentos Jurídicos de esta resolución. Se imponen a la parte demandada las costas de este procedimiento.

Así, por esta mi sentencia, juzgando en esta instancia, la pronuncio, mando y firmo.

El Magistrado